



Ley 2540 de 2025

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

LEY 2540 DE 2025

AGOSTO 27

por medio de la cual se introduce la modalidad de arbitraje para procesos ejecutivos, con el objetivo de contribuir a la descongestión del sistema judicial.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

TÍTULO I

GENERALIDADES DEL PROCESO ARBITRAL EJECUTIVO

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto implementar el mecanismo jurídico de arbitraje, en el trámite de los procesos ejecutivos a través de la formulación de lineamientos para su adecuación, operación, funcionamiento y contribuir a la descongestión del sistema judicial.

Artículo 2°. Arbitraje para procesos ejecutivos. Podrán someterse a arbitraje los procesos ejecutivos cuando exista pacto arbitral.

El proceso ejecutivo arbitral previsto en esta ley será institucional y se aplicará a cualquier tipo de ejecución. En ningún caso podrá darse la figura del arbitraje ad hoc.

El laudo arbitral será proferido en derecho. S& tendrá por no escrito el acuerdo referido a un laudo en equidad o técnico.

El proceso ejecutivo arbitral se registrará por esta sección de la ley y por la Sección Primera de la Ley 1563 de 2012 y en lo no previsto en estas disposiciones por lo dispuesto en el Código General del Proceso en cuanto fuere pertinente y en lo dispuesto en el Capítulo VI del Título III del Libro Tercero del Código de Comercio en lo relativo a ejecución de títulos valores.

Artículo 3°. Definiciones.

Pacto arbitral. Se entiende como la definición establecida en el artículo 3° de la Ley 1563 de 2012. Árbitro ejecutor. Es el árbitro encargado de adelantar el proceso ejecutivo arbitral objeto de la controversia. Árbitro de medidas cautelares previas. Es el árbitro encargado de decretar, y practicar e implementar las medidas cautelares previas en el proceso ejecutivo arbitral.

Puede ser el mismo árbitro ejecutor. Para efectos de la misma, se puede pactar que sea el mismo árbitro ejecutor.

Artículo 4°. Pacto arbitral para el proceso arbitral.

Ejecutivo. Es un negocio jurídico mediante el cual las partes se obligan a someter al arbitraje la ejecución de títulos ejecutivos y las controversias derivadas del negocio subyacente del título afecto al pacto; que, además, se sujetará a lo previsto en los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley 1563 de 2012.

El pacto arbitral para procesos ejecutivos puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria e implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ejecutivas y controversias ante los jueces.

Parágrafo. El pacto arbitral para el proceso arbitral ejecutivo no podrá formar parte de un título valor que se invoque como título ejecutivo. Deberá, necesariamente, constar en un compromiso plasmado en un documento anexo a él o separado de él, pero referido al mismo.

El pacto arbitral será cerrado cuando se refiere a un solo título ejecutivo y abierto cuando incluye varios títulos ejecutivos, presentes y futuros, que se deriven de una o varias relaciones contractuales determinadas.

Cuando se quiera adelantar la ejecución de una obligación derivada de un contrato que tenga el carácter de título ejecutivo y en dicho contrato exista una cláusula compromisoria, la ejecución se sujetará a lo dispuesto en esta ley. En este evento, no se requiere que conste en documento anexo o separado al contrato.

Artículo 5°. Información mínima y protección al consumidor.

En los contratos celebrados con consumidores en los que se estipule un pacto arbitral o en relación con los cuales se pacte arbitraje se deberá suministrar al consumidor información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los efectos y alcances

del pacto arbitral y el proceso arbitral ejecutivo.

Esta información debe permitir al consumidor conocer, los efectos del pacto arbitral, sus derechos, obligaciones, condiciones, y costos relacionados con el pacto arbitral y el proceso arbitral ejecutivo, así como conocer los efectos de la jurisdicción ordinaria.

El trámite arbitral aplicará con independencia de las reglas de procedimiento y potestades sancionatorias en sede jurisdiccional que se derivan por incumplimiento a sentencias, conciliaciones y transacciones en materia de consumo.

En el marco del proceso arbitral previsto en esta ley, se deberá observar el carácter irrenunciable de los derechos de los consumidores, lo que implica que ninguna cláusula del pacto arbitral o disposición de este trámite podrá interpretarse en perjuicio de dichos derechos.

Parágrafo 1°. La información suministrada al consumidor deberá quedar registrada en lenguaje claro y de manera explícita en medios físicos o magnéticos que puedan ser verificados.

En caso de incumplimiento de este deber por parte de la entidad, el consumidor no quedará obligado por el pacto arbitral, salvo que éste decida acudir al arbitraje o, habiendo sido convocado a un tribunal arbitral, no invoque la ineficacia del pacto a través de recurso de reposición contra el primer auto que se dicte en el proceso y siempre que haya sido debidamente notificado.

Parágrafo 2°. Cuando el pacto arbitral se incluya en un contrato celebrado por condiciones generales o por adhesión con un consumidor en los términos de la Ley 1480 de 2011 o se refiera al mismo, se deberá suministrar al consumidor la información a que se refiere este artículo.

Parágrafo 3°. En todos los contratos con entidades financieras bancarias o cualquiera que preste dinero al público de manera profesional debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera, la aceptación por parte del consumidor del pacto arbitral deberá ser especificada en la solicitud del crédito de forma independiente y no podrá ser un requisito o condición para el otorgamiento o desembolso del crédito. Adicionalmente, se prohíbe a dichas entidades la modificación de las tasas de interés, comisiones u otros cargos financieros en función de la celebración, aceptación o rechazo del pacto arbitral por parte del consumidor.

Cualquier variación en las condiciones financieras del crédito deberá fundamentarse exclusivamente en criterios de riesgo crediticio y no podrá estar relacionada de manera alguna con la decisión del consumidor respecto al pacto arbitral.

Parágrafo 4°. Las partes podrán suscribir un pacto arbitral para resolver controversias relacionadas con responsabilidad contractual y extracontractual derivadas de las relaciones de tránsito y transporte aéreo, marítimo y terrestre, en 1 conformidad con el procedimiento establecido en esta ley y en la Ley 1563 de 2012, según sea el caso, siempre que exista voluntad del consumidor o afectado y este sea el que elija si lo hace por pacto arbitral o jurisdicción ordinaria.

Parágrafo 5°. El incumplimiento de la presente norma por parte de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera será sancionado por dicha entidad de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Parágrafo 6°. Los consumidores tienen derecho a obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los alcances y efecto del pacto arbitral, del derecho de retracto: las diferencias entre el procedimiento ordinario y el arbitral, concretamente sobre la posibilidad de acudir a los jueces civiles, las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales o al arbitramento.

Parágrafo 7°. Para garantizar los derechos de los consumidores, la simple aceptación de los términos y condiciones en las relaciones de consumo no se considerará un pacto arbitral. Este deberá ser expreso, claro y reflejar la voluntad libre e informada del consumidor.

Artículo 6°. Retracto del pacto arbitral. En todos los contratos celebrados con consumidores de servicios financieros mediante contratos de adhesión o condiciones generales en los que se incluya pacto arbitral, se entenderá incorporado el derecho de retracto del consumidor respecto de dicho pacto, el cual podrá ser ejercido por el consumidor dentro de los sesenta (60) días siguientes al desembolso del crédito cuando se trate de contrato de mutuo o a partir del momento en el que se empezaron a cumplir las obligaciones a favor del consumidor.

Para tal efecto, el consumidor deberá entregar una comunicación a su contratante manifestando el ejercicio del derecho de retracto. En los pactos arbitrales deberá incluirse expresamente dicho derecho so pena que se entienda incluido sin limitación temporal, caso en el cual sólo podrá ejercerse hasta el vencimiento del término para formular excepciones de mérito en el respectivo proceso arbitral.

Parágrafo. En materia de consumo, el derecho de retracto de que trata el presente artículo será ejercido dentro del plazo establecido en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 para la garantía de bienes y servicios.

Artículo 7°. Efectos del pacto arbitral en materia ejecutiva.

Quien esté vinculado por el pacto arbitral acepta tácitamente:

El nombramiento de los árbitros ejecutores por parte del centro de arbitraje en donde se lleve a cabo el proceso, en caso de que las partes no lo hagan de común acuerdo. El nombramiento por parte del centro de arbitraje correspondiente de un árbitro de medidas cautelares previas por parte del centro de arbitraje en donde se lleve a cabo el proceso. Los codeudores, deudores solidarios, avalistas, fiadores y cualquier tercero garante, emisores de cartas de crédito que respalden la obligación, al suscribirse a la relación contractual, expresan su voluntad de adherirse al pacto arbitral y quedarán vinculados a los efectos de este en el proceso arbitral ejecutivo, salvo en los casos en que se suscriba un compromiso posterior al negocio jurídico subyacente, en los que solo quedarán vinculados si suscriben el compromiso, manifestando así su voluntad para adherirse al pacto arbitral.

Artículo 8°. Árbitros ejecutores. El proceso arbitral ejecutivo será sometido al conocimiento y decisión de un solo árbitro, cualquiera que sea su cuantía. No obstante, en procesos de mayor cuantía, las partes podrán determinar conjuntamente el número de árbitros, que siempre será impar. Los árbitros ejecutores para procesos de mínima y menor cuantía deberán cumplir, como mínimo, los mismos requisitos exigidos para ser Juez Municipal, sin perjuicio de las calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros.

Los árbitros ejecutores en procesos de mayor cuantía deberán cumplir, como mínimo, los mismos requisitos exigidos para ser Juez del Circuito, sin perjuicio de las calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros.

Los centros de arbitraje deberán contar con listas de árbitros ejecutores. Mientras las conforman, podrán utilizar las listas de árbitros existentes en el respectivo centro de arbitraje.

Artículo 9°. Árbitros de medidas cautelares previas. Al árbitro de medidas cautelares le corresponderá el decreto, ejecución y prácticas de medidas cautelares previas dentro del trámite del proceso arbitral ejecutivo, sin perjuicio de la facultad del árbitro ejecutor en esta materia.

El árbitro de medidas cautelares previas siempre será un árbitro único, que cumplirá como mínimo, los mismos requisitos exigidos para ser árbitro ejecutor, sin perjuicio de las calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros de arbitraje. El árbitro de medidas cautelares previas tendrá los mismos deberes de información y estará sometido a los impedimentos y recusaciones determinados en la ley para los árbitros ejecutores.

Los centros de arbitraje deberán contar con listas de árbitros de medidas cautelares previas. En tanto las conforman, podrán utilizar las listas de árbitros existentes en el respectivo centro de arbitraje, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el primer inciso de este artículo.

Artículo 10. Reglamento de los centros y procedimiento arbitral ejecutivo. Los centros de arbitraje podrán incorporar en sus reglamentos las reglas de procedimiento para el arbitraje ejecutivo y para la práctica de medidas cautelares previas, respetando las garantías mínimas al debido proceso.

De igual manera podrán fijar las tarifas de honorarios de árbitros y gastos administrativos del centro, que deberán incluir la labor secretarial.

Los centros de arbitraje, al establecer el procedimiento arbitral ejecutivo, deberán garantizar como mínimo el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes.

Artículo 11. Cuantía de los procesos arbitrales ejecutivos.

Los procesos arbitrales ejecutivos son de mínima, menor y mayor cuantía, en los términos previstos en el artículo 2° de la Ley 1563 de 2012.

Serán de mínima cuantía cuando las pretensiones patrimoniales no excedan los cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 SMLMV).

Artículo 12. Designación de los árbitros ejecutores y árbitro de medidas cautelares previas en el proceso arbitral ejecutivo. Las partes podrán nombrar de manera conjunta el árbitro ejecutor, en un término de cinco (5) días hábiles, prorrogables por acuerdo de las partes, o delegarán tal labor al centro de arbitraje en donde se lleve a cabo el proceso arbitral ejecutivo.

Los árbitros de medidas cautelares previas siempre serán nombrados por el centro mediante sorteo realizado por el centro en donde se lleve a cabo el proceso arbitral ejecutivo.

El centro de arbitraje tendrá a su cargo la secretaría del proceso arbitral ejecutivo, en los términos previstos en su reglamento. La remuneración por la secretaría hará parte de los gastos pagados al centro por el funcionamiento del tribunal.

Artículo 13. Término y suspensión del proceso arbitral ejecutivo. Si en el pacto arbitral no se establece el término de duración del proceso, este será hasta de doce (12) meses, contados a partir de expedición del auto de fijación del litigio, decreto de pruebas y aprobación de la liquidación del crédito, de que trata esta ley.

Dentro del término, el árbitro ejecutor tendrá cuatro (4) meses contados a partir de la expedición del auto de fijación del litigio, decreto de pruebas y aprobación de la liquidación del crédito de que trata esta ley para dictar el auto que ordena seguir adelante con la ejecución o el laudo ejecutivo, según se-a el caso. Dentro de este término deberá proferirse y notificarse la providencia que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o adición del laudo.

El término de los cuatro (4) meses podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda los doce (12) meses.

Parágrafo 1°. Los trámites previos a la audiencia de instalación del tribunal arbitral tendrán una duración máxima de cuatro (4) meses contados desde la radicación de la demanda. Vencido el término sin que se hubiere realizado tal audiencia, cesarán los efectos del pacto arbitral ejecutivo para la obligación objeto de la ejecución y se remitirán las actuaciones por parte del centro de arbitraje a la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa según el caso, incluyendo las relacionadas con las medidas cautelares, si existieran, para que continúe el proceso.

Parágrafo 2°. Emitido el auto que ordena seguir adelante la ejecución y vencido el término previsto en el inciso primero de este artículo, sin que se haya logrado el pago de la obligación, el expediente se remitirá al juez que sea competente para que continúe con el trámite.

Parágrafo 3°. Vencido el término de duración del proceso sin que se haya proferido laudo ejecutivo, y, si es el caso, su aclaración, complementación o corrección, se remitirá el expediente al juez que sea competente para que éste continúe el trámite del proceso. Conservarán validez las actuaciones realizadas ante el tribunal arbitral.

Artículo 14. Utilización de nuevas tecnologías y de medios electrónicos. Las actuaciones dentro del proceso arbitral ejecutivo se podrán realizar mediante la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones según lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia.

Los centros de arbitraje podrán habilitar plataformas de internet a través de las cuales se adelantará el proceso arbitral ejecutivo virtual.

La utilización de herramientas tecnológicas e informáticas se implementará de manera progresiva. Debe respetar el derecho a la igualdad, por lo que no se puede omitir la atención presencial en los Centros de Arbitraje cuando el usuario del servicio lo requiera y brindando especiales medidas a la población en condición de vulnerabilidad o en sitios del territorio donde no se disponga de conectividad por su condición geográfica.

TITULO II

TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL EJECUTIVO

Artículo 15. Iniciación del proceso arbitral ejecutivo. El proceso arbitral ejecutivo comenzará con la presentación de la demanda, que deberá reunir todos los requisitos exigidos por el Código General del Proceso, acompañada del pacto arbitral ejecutivo y la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de la presentación de la demanda. En la liquidación del crédito no se podrán incluir costos del tribunal arbitral. En caso de solicitar el trámite de medidas cautelares previas, la liquidación del crédito se remitirá por el Centro al árbitro de medidas cautelares.

Tratándose de procesos en los que es demandada una entidad pública del orden nacional, el centro de arbitraje correspondiente deberá remitir comunicación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, informando de la presentación de la demanda. La remisión de la comunicación, a la que se refiere este inciso, es requisito indispensable para la continuación del proceso arbitral.

Artículo 16. Pago de gastos y honorarios en el proceso arbitrales ejecutivos. Una vez recibida la demanda, el centro de arbitraje estimará los gastos y honorarios del tribunal y lo notificará a la parte demandante para que dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes proceda con el pago total de los mismos.

Los costos del centro y los honorarios de los árbitros serán inicialmente asumidos en su totalidad por el ejecutante. Sin embargo, en caso de que el ejecutado sea vencido en el proceso, el tribunal arbitral podrá ordenar que el ejecutado restituya en todo o en parte dichos costos al ejecutante de conformidad con la decisión arbitral, en los casos en los cuales el accionante sea de bajos recursos.

Parágrafo. En caso de no sufragarse o pagarse los honorarios y gastos del tribunal determinados en el presente artículo, el centro emitirá una certificación de no integración del tribunal arbitral ejecutivo, por el no pago de los honorarios y gastos. La anterior certificación tendrá los mismos efectos del auto que declara concluidas las funciones del tribunal arbitral y extinguidos los efectos del pacto arbitral para la ejecución de las obligaciones que consten en los títulos ejecutivos objeto del proceso, a menos que el demandado pague los honorarios y gastos dentro de los 10 días siguientes a la oportunidad que tenía el demandante para hacer el respectivo pago, previa comunicación que para el efecto le envíe el centro de arbitraje. En todo caso, no se extinguirán los efectos del pacto arbitral sin que el demandado haya tenido la posibilidad de realizar este pago.

Artículo 17. Conciliación. Las partes de común acuerdo podrán solicitar audiencia de conciliación en cualquier etapa del proceso arbitral ejecutivo. De llegar a un acuerdo que finalice el proceso antes de emitir el auto que ordena seguir adelante la ejecución se causará el 30% de los honorarios de los árbitros y el 30% de los gastos del centro de arbitraje, el valor restante deberá reintegrarse a la parte que hubiere pagado. No habrá lugar al reintegro de las sumas pagadas por concepto de honorarios de árbitros y gastos del centro de arbitraje si el proceso termina por acuerdo conciliatorio después de emitido el auto que ordena seguir adelante la ejecución.

Artículo 18. Integración del tribunal arbitral para el proceso arbitral ejecutivo. Recibida la demanda y realizado el pago de los honorarios y gastos, el centro de arbitraje adelantará la integración del tribunal arbitral. Para el efecto procederá en los términos indicados en la presente ley, en lo no regulado, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14 del Estatuto Arbitral.

Artículo 19. Audiencia de instalación del tribunal de competencia y definición de competencia mandamiento de pago. Una vez cancelados los honorarios y gastos del tribunal y aceptada la designación por los árbitros y, en su caso, cumplidos los trámites de recusación y reemplazo,

procederá la instalación del tribunal en audiencia, que se realizará con citación de todas las partes, para la cual el centro fijará día y hora que será notificada. La audiencia se realizará con o sin la concurrencia de las partes o sus apoderados.

De existir árbitro de medidas cautelares previas, el mismo asistirá a la audiencia para entregar su informe y el cuaderno de medidas cautelares al tribunal.

El informe del árbitro de medidas cautelares previas será analizado por el tribunal arbitral ejecutivo y si encuentra que la actuación de aquel se ajustó a las funciones que le correspondían, ordenará el pago del cien por ciento (100%) de los honorarios que le correspondan al árbitro de medidas cautelares previas y de los gastos administrativos del centro.

El tribunal arbitral ejecutivo resolverá sobre su propia competencia para conocer y decidir el proceso ejecutivo, mediante auto susceptible de recurso de reposición.

Si se decide que no es competente para conocer de ninguna de las pretensiones de la demanda ejecutiva, se extinguirán los efectos del pacto arbitral para el caso concreto y el expediente se remitirá a la jurisdicción competente para que se continúe con el proceso.

En caso de falta de competencia o de rechazo de la demanda, el tribunal arbitral levantará las medidas cautelares, si es el caso, y ordenará al centro de arbitraje la devolución de los montos pagados por el servicio, previo reconocimiento y pago de los honorarios y gastos que se hubieren podido generar por su decreto y práctica.

La admisión, inadmisión o rechazo de la demanda y el mandamiento de pago se surtirán conforme a lo previsto en el Código General del Proceso.

Artículo 20. Traslado y contestación de la demanda ejecutiva. De la demanda ejecutiva y del mandamiento de pago se correrá traslado por el término de diez (10) días para que se propongan excepciones de mérito.

De las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado se correrá traslado al ejecutante por el término de diez (10) días para que se pronuncie sobre ellas y allegue o pida las pruebas que pretenda hacer valer.

Las causales de excepciones previas o la falta de los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante el recurso de reposición contra del mandamiento de pago, en los términos del inciso 2° del artículo 430 del Código General del Proceso.

Dentro del traslado, el ejecutado también deberá realizar las manifestaciones u objeciones correspondientes a la liquidación del crédito.

En el trámite arbitral ejecutivo no es procedente ningún tipo de incidente.

Salvo norma en contrario, el tribunal arbitral ejecutivo decidirá toda cuestión que se suscite en el proceso, decretando los medios probatorios idóneos para proferir su determinación, por medio de providencia que será susceptible de recurso de reposición.

Parágrafo. Si dentro del término del traslado de la demanda no se proponen excepciones se procederá en los términos del inciso 2° del artículo

440, del Código General del Proceso.

Artículo 21. Reforma de la demanda en procesos arbitrales ejecutivos. La demanda arbitral ejecutiva se podrá reformar, por una sola vez, hasta el vencimiento del término del traslado de las excepciones de mérito al ejecutante, que trata la presente ley.

La reforma de la demanda deberá presentarse debidamente integrada en un solo escrito indicando al tribunal y al ejecutado cuáles fueron los cambios realizados.

Artículo 22. Auto de fijación del litigio, decreto de pruebas, aprobación de la liquidación del crédito e inicio del conteo del término del proceso arbitral ejecutivo. Vencido el término de traslado de las excepciones al ejecutante, el tribunal, dentro de los diez (10) días siguientes, mediante auto escrito, proferirá auto con las siguientes determinaciones:

Fijará el litigio. Verificará que no existe ninguna causal de nulidad y en tal caso saneará el proceso. Aprobará la liquidación del crédito, sin perjuicio de su actualización posterior. Decretará las pruebas,

En caso de que no haya lugar a práctica de pruebas, el tribunal arbitral ejecutivo declarará, en el mismo auto, cerrada la etapa probatoria del proceso y dará traslado a las partes para presentar los alegatos de conclusión por escrito, en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del auto.

Ejecutoriado el auto que trata el presente artículo, comenzará a contarse el término de duración del proceso arbitral ejecutivo, establecido en la presente ley.

Las determinaciones de este auto solo podrán ser objeto del recurso de reposición.

Artículo 23. Audiencia de pruebas alegatos y laudo ejecutivo.

Cuando haya lugar a la práctica de pruebas, se realizarán las audiencias que sean necesarias, con participación de las partes.

La presente etapa del proceso se podrá adelantar en los términos de la audiencia de instrucción y juzgamiento que trata el artículo 373 del Código General del Proceso, sin embargo, el tribunal podrá fijar un término para rendir, por escrito, alegatos de conclusión y, con posterioridad, notificar mediante medios electrónicos el laudo ejecutivo.

Si las excepciones o las oposiciones no prosperan o prosperan parcialmente, o en el evento en que no fueren presentadas, se proferirá auto en el que se ordenará seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda y se declarará causado el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios del tribunal y el cien por ciento (100%) de los gastos administrativos del centro de arbitraje.

En firme el auto que resuelve seguir adelante la ejecución no procederán discusiones adicionales sobre el cumplimiento de los requisitos formales del título ejecutivo.

El laudo que decide las excepciones en forma totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en este se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se declarará causada la totalidad de los honorarios y gastos a favor del tribunal y el centro de arbitraje.

El laudo emitido en el proceso ejecutivo arbitral podrá ser aclarado, complementado o corregido, de oficio o por solicitud que realice cualquiera de las partes dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Parágrafo 1°. El tribunal podrá solicitar actualización de la liquidación del crédito en cualquier momento. El tribunal decidirá sobre su procedencia y legalidad.

Parágrafo 2°. Las etapas del proceso arbitral ejecutivo relacionadas con el secuestro, avalúo y remate de bienes se realizarán en los términos indicados en el Código General del Proceso. Cualquier decisión de fondo deberá ser resuelta por el árbitro ejecutor.

Artículo 24. Cesación de funciones del tribunal. El tribunal cesará en sus funciones conforme con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 35 del Estatuto Arbitral y por las siguientes causas:

Por la expiración de los términos fijados para el proceso o el de sus prórrogas.

En el evento en que la cesación de funciones se deba a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 12 de esta ley, el Centro de Arbitraje reintegrará al acreedor ejecutante o a quien haya sufragado los gastos y honorarios las sumas pagadas por el proceso arbitral ejecutivo.

Tratándose de la cesación de funciones por la razón prevista en el parágrafo 2° del artículo 12 de esta ley, previa remisión de las actuaciones al juez, el tribunal arbitral declarará causado el cincuenta por ciento 50% restante de sus honorarios.

Cuando la cesación de funciones se deba a lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 12 de esta ley, previo a la remisión al juez, el tribunal arbitral solo declarará causado el veinte por ciento (20%) de los honorarios del tribunal y de los gastos administrativos del centro de arbitraje.

Cuando reciba la notificación de la admisión en procesos de insolvencia, convalidación de acuerdo privado, reorganización y liquidación de personas naturales y jurídicas. En tales casos, el tribunal cesará sus funciones en relación con las personas admitidas en dicho trámite; manteniendo sus funciones frente a terceros garantes y codeudores, aplicando las reglas del Código General del Proceso. De igual manera, el tribunal mantendrá sus funciones para todos los efectos de la remisión del expediente a la entidad o autoridad correspondiente. Revocatoria del mandamiento ejecutivo ante la ausencia de requisitos del título ejecutivo. Rechazo de la demanda por las causales previstas en esta ley. Cuando se profiera laudo que decide las excepciones en forma totalmente favorable al demandado. Cumplimiento anticipado de la obligación. Por la terminación de la ejecución por pago o por cualquier medio de terminación anormal del proceso. En este evento, el tribunal mantendrá sus funciones exclusivas para decretar y ejecutar todas las actuaciones que se deriven de la terminación del proceso. Lo anterior, en los términos de los artículos 312 y siguientes del Código General del Proceso.

Los honorarios y gastos del tribunal que no se hayan causado serán devueltos por el tribunal al acreedor ejecutante o quien haya sufragado los gastos en las proporciones previstas en esta ley.

Artículo 25. Intervención de otras partes, terceros y acumulación de demandas y procesos arbitrales ejecutivos.

La acumulación de demandas o procesos ejecutivos por ningún motivo hará perder la competencia del tribunal arbitral. Quien solicite que se acumule el proceso ejecutivo o la demanda, por este hecho, adhiere al pacto arbitral ejecutivo, acepta la jurisdicción arbitral y deberá cubrir los gastos de administración del centro de arbitraje y los honorarios de los árbitros que se puedan derivar de las mismas.

En caso de que quienes hayan solicitado la acumulación no consignen oportunamente los gastos de administración y honorarios del tribunal, el proceso arbitral ejecutivo continuará y no conocerá del trámite cuya acumulación fue solicitada.

Los temas relacionados con incidentes de desembargo o cualquier actuación accesorio al proceso arbitral ejecutivo proveniente de terceros dentro de la acción arbitral ejecutiva serán sometidos a la determinación del tribunal, salvo que el tercero se oponga a ello, caso en el cual se remitirá al juez que hubiere conocido de la ejecución de no existir pacto arbitral. El juez decidirá en el término de diez (10) días.

A solicitud de parte, el tribunal podrá acumular dos o más procesos arbitrales siempre y cuando no se haya fijado la primera fecha para remate.

Los procesos arbitrales serán acumulados en aquél cuya fecha del mandamiento ejecutivo sea primero en el tiempo y, en caso de que los autos sean proferidos en la misma fecha, se acumulará en el trámite en el cual se haya notificado primero, o practicado medidas cautelares si la notificación no se ha realizado. Las partes podrán establecer de mutuo acuerdo a qué tribunal arbitral se realizará la acumulación.

TÍTULO III.

RECURSOS Y EJECUCIÓN DEL LAUDO

Artículo 26. Recurso extraordinario de anulación en contra del laudo arbitral ejecutivo. Contra el laudo arbitral ejecutivo procede el recurso extraordinario de anulación. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante el tribunal arbitral, indicando las causales invocadas y dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición.

La secretaría del tribunal arbitral correrá traslado a la otra parte por diez (10) días, sin necesidad de auto que lo ordene. Vencido aquel, dentro de los cinco (5) días siguientes, el Secretario del tribunal arbitral enviará los escritos presentados junto con copia del expediente a la autoridad judicial competente para conocer del recurso.

La interposición del recurso de anulación no suspenderá la actuación del proceso arbitral ejecutivo, que continuará su trámite.

Contra el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, no es procedente el recurso de anulación.

Las causales del recurso de anulación, el trámite y los efectos de la sentencia del juez de anulación se sujetarán a lo previsto en los artículos [41](#), [42](#), [43](#) y [44](#) de la Ley [1563](#) de 2012.

Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales ejecutivos serán competentes las autoridades judiciales del lugar en donde hubiese funcionado el tribunal de arbitraje, así:

La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial cuando se trate de casos de mayor cuantía. El Juez Civil del Circuito cuando se trate de casos de mínima y menor cuantía. La Sección o Sala Tercera del Tribunal Administrativo del Distrito Judicial cuando se trate de recursos de anulación de laudos arbitrales ejecutivos en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas.

Artículo 27. Recurso extraordinario de revisión en contra del laudo arbitral ejecutivo. El recurso de revisión se registrará por lo indicado en el artículo 45 del Estatuto Arbitral.

Será competente para conocer del recurso extraordinario de revisión de laudos arbitrales ejecutivos la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar en donde hubiese funcionado el tribunal de arbitraje.

Cuando se trate de recursos de anulación o revisión de laudos arbitrales ejecutivos en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección o Sala Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Judicial del lugar en donde hubiese funcionado el tribunal de arbitraje.

Artículo 28. Ejecución de laudos arbitrales nacionales. Los laudos arbitrales nacionales, excepto los dictados en arbitrajes internacionales cuya sede sea Colombia, podrán ejecutarse ante el mismo tribunal arbitral, siempre y cuando la solicitud de ejecución se haga dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición.

Si el tribunal estaba compuesto por tres árbitros, actuará como árbitro de ejecución el presidente del tribunal o, si este no acepta, uno de los restantes árbitros en orden alfabético por su apellido. Si el tribunal estaba compuesto por un solo árbitro, éste actuará como árbitro de ejecución previa aceptación del encargo. Si ninguno acepta, el centro de arbitraje adelantará la integración del tribunal entre la lista de árbitros ejecutores.

Vencido el término de los diez (10) días hábiles no se podrá ejecutar el laudo ante el mismo tribunal que lo profirió, por lo que el interesado en la ejecución deberá convocar un nuevo tribunal arbitral ejecutivo para cobrar la obligación.

Solicitada la ejecución del laudo dentro del término, se iniciará el trámite de ejecución, que se registrará por las normas especiales de la presente ley.

Los temas no regulados en la presente ley, que sean acordes con el procedimiento arbitral, serán regidos por el artículo 306 del Código General del Proceso.

La ejecución de laudos arbitrales en contra de entidades públicas o de particulares que ejercen funciones administrativas no se podrá adelantar ante los mismos árbitros que los profirieron.

Parágrafo. Cuando el juez que conozca del recurso de anulación haya accedido a la suspensión de la ejecución del laudo, el proceso arbitral ejecutivo que se hubiere iniciado se suspenderá.

Lo previsto en este artículo también se aplicará para obtener el cumplimiento de las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas por el tribunal arbitral, el término previsto en el inciso primero de este artículo contará desde la ejecutoria del auto que

las hubiere aprobado.

Artículo 29. Tarifas y pérdida de honorarios de los árbitros.

El Ministerio de Justicia y del Derecho reglamentará las tarifas de los honorarios de los árbitros ejecutores, de los de medidas cautelares previas, de los árbitros ejecutores de los laudos y de los gastos administrativos que le correspondan al centro, para el efecto deberá tener en cuenta criterios que permitan acceder a los servicios a todos los ciudadanos, en especial a las personas más vulnerables de los estratos 1, 2 y 3. Los centros de arbitraje también podrán fijarlas en sus reglamentos, respetando tales límites.

Los árbitros ejecutores perderán sus honorarios en los términos indicados por el artículo 48 del Estatuto Arbitral.

La anulación del laudo ejecutivo no afectará los honorarios del árbitro de medidas cautelares previas. Sin embargo, si el tribunal arbitral encuentra que el árbitro de medidas cautelares no cumplió a cabalidad sus funciones, el tribunal podrá ordenar la pérdida total o parcial de sus honorarios, dineros que serán devueltos a la parte que los sufragó.

TÍTULO IV.

EL PACTO ARBITRAL EJECUTIVO Y LA GARANTÍA HIPOTECARIA

Artículo 30. Proceso arbitral ejecutivo del crédito hipotecario. En el contrato de crédito hipotecario, en sus modificaciones o en acuerdos posteriores, las partes podrán acordar pacto arbitral en los términos de la presente ley.

Los créditos hipotecarios para vivienda requerirán un pacto arbitral especial, en el que se garantice la información en los términos de la presente ley. Los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda de interés social, en los términos del artículo 91 de la Ley 388 de 1997 y demás normas que los sustituyan, así como los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda donde habiten menores de edad, no podrán ser objeto del pacto arbitral ejecutivo, ni mediante el consentimiento informado.

La ejecución hipotecaria se adelantará en los términos previstos en la presente ley y en lo no previsto, conforme con lo establecido en los artículos 467 y siguientes del Código General del Proceso.

Parágrafo 1°. Para el otorgamiento de toda escritura pública de hipoteca sobre un bien destinado a vivienda que contenga pacto arbitral ejecutivo, el notario indagará al propietario del inmueble si ha sido informado sobre éste y, en todo caso le informará y advertirá sobre el alcance y efecto del pacto y el proceso arbitral ejecutivo. El notario dejará constancia expresa de la estipulación del pacto arbitral incluido en el contrato y de las consecuencias que esto implica. El notario que omita dejar constancia en la respectiva escritura pública de los deberes establecidos en el presente artículo incurrirá en causal de mala conducta.

Parágrafo 2°. En el proceso arbitral ejecutivo para créditos de vivienda, los honorarios de los árbitros o gastos del centro de arbitraje serán asumidos en su integralidad por el acreedor ejecutante, en ningún caso se podrán imputar a las obligaciones del deudor ni requerir su pago.

El incumplimiento por parte del acreedor de la presente norma podrá ser investigado y sancionado en los términos de la presente ley.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de un acreedor hipotecario, que hubiere suscrito contrato de hipoteca con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, éste podrá hacer requerimiento escrito al deudor hipotecario, para que dentro de un término de diez (10) días acuerde con él la procedencia del pacto arbitral ejecutivo para los fines previstos en la presente ley. El silencio del deudor hará entender su negativa al pacto.

TÍTULO V.

DECRETO Y PRÁCTICA DE MEDIDAS CAUTELARES.

Artículo 31. Medidas cautelares. El decreto, práctica y levantamiento de las medidas cautelares se someterán a las normas del Código General del Proceso o el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según corresponda.

A petición de cualquiera de las partes, el tribunal podrá ordenar las medidas cautelares de embargo y secuestro, en los términos establecidos en los artículos 599 y siguientes del Código General del Proceso.

En caso de cesación de funciones, el tribunal ordenará el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado o practicado. Pasados los treinta (30) días sin que se haya producido el levantamiento de las medidas cautelares, la medida caducará automáticamente. El registrador o a quien le corresponda, a solicitud de parte, procederá a cancelarla.

En caso de la cesación de funciones del tribunal por razón de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 23, no se levantarán las medidas cautelares que se hayan dispuesto en contra de las personas involucradas en los procesos señalados en tal artículo, y se pondrá el proceso ejecutivo en su integridad a disposición de la autoridad competente.

Artículo 32. Medidas cautelares previas. Cualquiera de las partes, con anterioridad a la instalación del tribunal, podrá solicitar al centro de arbitraje competente para adelantar el proceso arbitral que nombre un árbitro para decretar y practicar medidas cautelares, de acuerdo con el procedimiento de la presente ley.

El árbitro de medidas cautelares previas estará facultado para dar por terminada la actuación por el pago total de la obligación o por los medios anormales de terminación del proceso, señalados en el Código General del Proceso, siempre que el tribunal arbitral ejecutivo no se hubiere instalado. En estos eventos, podrá declarar causado el 100% de sus honorarios y de los gastos administrativos del Centro.

Artículo 33. Requisitos de la solicitud para la práctica de medidas cautelares previas. Para efectos de la solicitud del decreto y práctica de medidas cautelares previas, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

Presentar la solicitud al centro correspondiente, adjuntando el título ejecutivo. Aportar la liquidación actualizada del crédito que sería objeto de la ejecución arbitral. Acreditar la existencia del pacto arbitral invocado. Cumplir con los requisitos formales previstos en los numerales 2, 3 y 10 del artículo 82, así como en los numerales 1 y 2 del artículo 84 del Código General del Proceso. Las demás que exija la ley para efectos del decreto y práctica de una medida cautelar, conforme con el Código General del Proceso o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según corresponda.

Artículo 34. Trámite de las medidas cautelares previas de embargo y secuestro dentro del proceso arbitral ejecutivo.

Recibida la solicitud de medidas cautelares previas, el centro de arbitraje fijará los gastos y honorarios que correspondan al trámite. Notificada la fijación de los honorarios y gastos, el interesado tendrá un término de cinco (5) días para pagarlos.

Pagados los honorarios y gastos, el centro designará al árbitro de medidas cautelares.

En caso de que el interesado no consigne los gastos y honorarios para el decreto y práctica de medidas cautelares previas, se entenderá desistida la petición y el solicitante solo podrá pedir las ante el árbitro ejecutor.

Pagados los gastos y honorarios y aceptada la designación por el árbitro de medidas cautelares previas, se procederá a admitir, inadmitir o negar la solicitud de medidas.

En el auto admisorio o inadmisorio de la solicitud de la medida cautelar el árbitro aprobará los gastos y honorarios fijados por el centro de arbitraje. El auto será susceptible del recurso de reposición.

En caso de inadmisión de la solicitud de medidas cautelares previas, el peticionario tendrá el término de cinco (5) días para subsanar los defectos formales de su petición.

Subsanados los defectos se procederá con su admisión, de lo contrario se rechazará la solicitud.

Admitida la solicitud, el árbitro procederá con el decreto y la práctica de medidas cautelares solicitadas.

La práctica de medidas cautelares previas se realizará dentro de un periodo de treinta (30) días hábiles, que se contarán a partir de la ejecutoria del auto que las decreta.

Dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la medida cautelar previa, el ejecutante deberá presentar la demanda ejecutiva arbitral ante el centro de arbitraje. De no ser presentada dentro del término señalado o de no haber culminado los trámites previos a la audiencia de instalación del tribunal arbitral en el término previsto en esta ley. La medida cautelar se levantará inmediatamente sin necesidad de auto que lo ordene.

El árbitro de medidas cautelares previas deberá asistir a la audiencia de instalación del tribunal arbitral, que trata la presente ley, para los fines allí previstos. El árbitro de medidas cautelares perderá competencia a partir de la instalación del tribunal de ejecución.

En cualquier momento, ante el árbitro de medidas cautelares previas o el árbitro ejecutor, según la etapa de la actuación, el afectado podrá ejercer las facultades señaladas en los artículos 602 a 604 del Código General del Proceso.

Los aspectos no regulados en el presente artículo se regirán por lo establecido en los artículos 599 a 604 del Código General del Proceso.

Artículo 35. De la administración, avalúo y remate de bienes.

Los bienes legalmente embargados y secuestrados deberán ser administrados, custodiados y manejados por personas o entidades especializadas; de tal manera que garanticen su conservación y buena administración.

Los centros de arbitraje podrán realizar convenios para que entidades especializadas realicen todos los trámites necesarios para la administración, avalúo y posterior remate de los bienes objeto del proceso de ejecución. Los remates de los bienes se podrán realizar directamente por el centro de arbitraje, en los términos del artículo 448 del Código General del Proceso, o mediante la utilización de nuevas tecnologías, incluido el uso de martillos electrónicos regulados en la Ley 1676 de 2013 y las facultades determinadas en el parágrafo 1° del artículo 454 del Código General del Proceso.

Parágrafo 1°. Las personas jurídicas podrán crear entidades especializadas en la prestación de los servicios de administración, avalúo y remate de los bienes objeto de las medidas cautelares, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos que para el efecto determine el Ministerio de Justicia y del Derecho que, además, autorizará su funcionamiento. El Ministerio de Justicia y del Derecho reglamentará las tarifas, expensas o gastos que podrán cobrar las entidades autorizadas para la administración de los bienes embargados y secuestrados y la forma en la que los centros de arbitraje deberán llevar los registros de los dineros recibidos en cumplimiento de las medidas cautelares, así como de los bienes que sean embargados y secuestrados.

Los centros de arbitraje podrán asumir directamente la administración, avalúo y remate de los bienes objeto de las medidas cautelares, de hacerlo, deberán aplicar las tarifas que sean fijadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho para las entidades especializadas acá descritas.

El Ministerio de Justicia y del Derecho ejercerá el control, inspección y vigilancia de las entidades especializadas en la administración, avalúo y remate de los bienes objeto de las medidas cautelares.

Parágrafo 2°. Los centros de arbitraje administrarán los dineros recibidos por el servicio del proceso ejecutivo arbitral y aquellos que se paguen en cumplimiento de las medidas cautelares, a través de una entidad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, en cuentas de depósito judicial, encargo fiduciario o patrimonios autónomos, según lo elijan. Los dineros provenientes de medidas cautelares se depositarán a nombre del deudor ejecutado y a órdenes del tribunal arbitral, de manera tal que los recursos puedan identificarse e individualizarse por la identificación del deudor, del acreedor y del proceso al que están afectos. Los centros de arbitraje deberán ejercer el cuidado razonable en la custodia y preservación de los bienes distintos a sumas de dinero, objeto de las medidas cautelares que se encuentren en su tenencia.

Los bienes embargados y secuestrados dentro del proceso arbitral seguirán siendo administrados conforme con lo previsto en la presente ley, aunque sean remitidas las actuaciones al juez ordinario o de ejecución.

TÍTULO VI ARBITRAJE SOCIAL DE EJECUCIÓN

Artículo 36. Arbitraje social de ejecución. Los centros de arbitraje deberán promover el arbitraje social de ejecución y facilitar el acceso a la prestación gratuita del servicio de este tipo de arbitraje para obligaciones de mínima cuantía en los términos del artículo 25 del Código General del Proceso, sin perjuicio de que cada centro pueda prestar el servicio por cantidades superiores.

En estos procesos, las partes no requerirán apoderados profesionales del derecho y se llevarán a cabo por un solo árbitro, independientemente de que las partes hayan previsto un número distinto de árbitros en su pacto arbitral. Los centros de arbitraje podrán celebrar convenios con universidades acreditadas con alta calidad, para que estudiantes de consultorios jurídicos y estudiantes que realicen la judicatura representen a

las partes en los procesos de arbitraje social de ejecución, hasta por la cantidad que señala el primer inciso de este artículo.

Cada centro de arbitraje tendrá una lista de árbitros voluntarios, que serán designados en cada caso por sorteo. Cuando el arbitraje no pueda adelantarse por los árbitros de la lista de árbitros, el centro designará los árbitros, por sorteo, de la lista general de árbitros ejecutores del centro.

El árbitro sorteado que se abstenga de aceptar el nombramiento, sin justa causa, será excluido de la lista de árbitros del respectivo centro.

TÍTULO VII

PROHIBICIONES GENERALES.

Artículo 37. Prohibición a la banca y entidades financieras para crear o participar a cualquier título en entidades que administren el proceso arbitral ejecutivo. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, las asociaciones y redes de pagos electrónicos, las personas jurídicas o naturales cuya actividad principal sea otorgar préstamos de dinero, no podrán participar a ningún título en la creación, desarrollo o funcionamiento de las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro que creen centros de arbitraje que administren el proceso arbitral ejecutivo.

De igual manera, las, asociaciones y redes de pagos electrónicos no podrán participar a ningún título en la creación, desarrollo o implementación de este tipo de Instituciones.

Las personas jurídicas o naturales cuya actividad principal sea otorgar préstamos de dinero, no podrán participar a ningún título en la creación, desarrollo o funcionamiento de centros de arbitraje que tramiten arbitrajes ejecutivos.

El incumplimiento de la presente norma por parte de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera será sancionado por dicha entidad de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

El incumplimiento de la presente norma por otras personas jurídicas será sancionado por la entidad que ejerza su inspección, vigilancia o control.

El incumplimiento de la presente norma por personas naturales será sancionado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 38. Reserva del proceso. Los procedimientos regulados en la presente ley, al tratarse de ejecuciones con medidas cautelares, serán reservados; cualquier divulgación indebida de información proveniente de las entidades autorizadas para adelantar las ejecuciones aquí reguladas, generará las sanciones administrativas a que haya lugar para los centros, sus operadores y las partes.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 39. Vacíos de la ley. Los vacíos normativos serán interpretados y resueltos con base en la Ley 1563 de 2012, la Ley 1564 de 2012 y en los principios pro actione, economía procesal y acceso a la justicia.

Artículo 40. Vigencia. La presente ley empezará a regir seis (6) meses después de su promulgación y derogará las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Efraín Cepeda Sarabia.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Diego Alejandro González González.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Jaime Raúl Salamanca Torres.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jaime Luis Lacouture Peñaloza.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 26 de agosto de 2025

De conformidad con el proveído de los artículos 166 y 168 de la Constitución Política de Colombia, desarrollados por los artículos 199 y 201 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), que a la letra rezan:

Artículo 166 “El Gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta.

Si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Si las Cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos”.

(...)

“Artículo 168. Si el Presidente no cumpliera el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el Presidente del Congreso”.

Teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que la Presidencia de la República devuelve el Proyecto de Ley número 08 de 2023 Senado, 211 de 2024 Cámara, por medio de la cual se introduce la modalidad de arbitraje para procesos ejecutivos, con el objetivo de contribuir a la descongestión del sistema judicial, sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Presidente del Congreso de la República, imparte la sanción correspondiente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA-RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE.

DADA EN BOGOTÁ, D. C., A 27 DE AGOSTO DE 2025.

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY.

SECRETARÍA GENERAL

SLE-CS-990-2025

Bogotá, D. C., 26 de agosto de 2025

Doctor

GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO

Presidente de la República

Ciudad

Señor Presidente:

Atendiendo el proveído de los artículos 166[1] y 168[2] de la Constitución Política, y acompañado de todos sus antecedentes, de manera atenta, y debidamente autorizado por el Doctor Lidio Arturo García Turbay, Presidente del Senado de la República me permito enviar en doble ejemplar, el expediente debidamente sancionado por el Presidente del Congreso, por medio de la cual se introduce la modalidad de arbitraje para procesos ejecutivos, con el objetivo de contribuir a la descongestión del sistema judicial.

El mencionado Proyecto de ley fue considerado y aprobado en sesión de la Comisión Primera del Senado de la República el 5 de septiembre de 2023 y en sesión Plenaria del Senado de la República el 24 de julio de 2024. En la Cámara de Representantes en Sesión de la Comisión Tercera el 11 de diciembre de 2024 y en sesión Plenaria el 11 y 16 de junio de 2025.

Informe de Conciliación aprobada por el Senado de la República y en la Cámara de Representantes el 19 de junio de 2025, respectivamente.

Cordialmente,

El Secretario General,
Diego Alejandro González González.

NOTAS DE PIE DE PAGINA

[1] Artículo 166. "El Gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta.

Si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Si las Cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos".

(...)

[2] Artículo 168. Si el Presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el Presidente del Congreso".

Fecha y hora de creación: 2026-04-09 04:08:56



Law 2540 of 2025

The information provided is for informational purposes only. The Administrative Department of Public Service is not responsible for the current validity of this regulation. Content updates are made on an ongoing basis.

LAW 2540 OF 2025

AUGUST 27

This law introduces arbitration for executive proceedings, aiming to help reduce congestion in the court system.

The Congress of Colombia,

ORDERS:

TITLE I

Overview of the Executive Arbitration Process

Article 1. Purpose. This law aims to establish arbitration as a legal mechanism for executive proceedings, setting guidelines for its adaptation, operation, and use, and helping ease the burden on the judicial system.

Article 2. Arbitration in executive proceedings. Executive proceedings may be submitted to arbitration when an arbitration agreement exists.

The executive arbitration process outlined in this law will be institutional and apply to any type of enforcement. Ad hoc arbitration will not be permitted under any circumstances.

The arbitration award must be issued according to the law. Any agreement referring to an award based on fairness or technical expertise will be considered invalid.

The arbitral enforcement proceeding will be governed by this section of the law, the First Section of Law [1563](#) of 2012, and, where not specifically addressed in these regulations, by the General Procedural Code as applicable, and by Chapter VI, Title III, Book Three of the Commercial Code regarding enforcement of negotiable instruments.

Article 3. Definitions.

Arbitration agreement. This term is defined as stated in Article [3](#) of Law [1563](#) of 2012. Executive arbitrator. This is the arbitrator responsible for conducting the executive arbitration proceedings in the dispute. Arbitrator for preliminary precautionary measures. This is the arbitrator who issues, carries out, and enforces the preliminary precautionary measures in the executive arbitration process.

This role may be held by the same executive arbitrator. For these purposes, it can be agreed that the executive arbitrator will serve both functions.

Article 4. Arbitration agreement for the arbitral process.

Executive. This is a legal arrangement in which the parties agree to submit to arbitration the enforcement of executive titles and any disputes arising from the underlying transaction related to the title covered by the agreement; in addition, it will be governed by the provisions of Articles [3](#), [4](#), [5](#) and [6](#) of Law [1563](#) of 2012.

The arbitration agreement in executive proceedings may take the form of a commitment or an arbitration clause, and means the parties waive their right to bring their executive claims and disputes before the courts.

Paragraph. The arbitration agreement for the executive arbitral process cannot be included as part of a negotiable instrument that is invoked as an executive title. It must, without exception, be set out in a separate agreement—either in an annexed document or a separate document—specifically referring to the same title.

The arbitration agreement is considered closed when it applies to a single enforceable instrument, and open when it covers several enforceable instruments—whether current or future—that arise from one or more specific contractual relationships.

If you want to enforce an obligation from a contract that qualifies as an enforceable instrument and that contract includes an arbitration clause, the enforcement will follow the terms outlined in this law. In this case, it is not necessary for the arbitration agreement to be in a separate or attached document.

Article 5. Minimum Information and Consumer Protection.

In contracts signed with consumers where an arbitration agreement is included, or where arbitration is otherwise agreed upon, consumers must be provided with clear, accurate, sufficient, timely, verifiable, understandable, precise, and appropriate information regarding the effects and scope

about the arbitration agreement and the executive arbitration process.

This information should enable consumers to understand the impact of the arbitration agreement, their rights, obligations, terms, and costs associated with both the arbitration agreement and the executive arbitration process, as well as the implications of ordinary jurisdiction.

The arbitration process will be applied independently of any procedural rules or sanctioning powers that may arise in judicial settings due to noncompliance with judgments, settlements, or agreements related to consumer matters.

Within the framework of the arbitration process established by this law, the non-waivable nature of consumer rights must be upheld. This means that no clause of the arbitration agreement or any part of this process may be interpreted in a way that undermines these rights.

Paragraph 1. All information provided to the consumer must be recorded in clear, straightforward language, and explicitly documented in physical or electronic formats that can be verified.

If the entity fails to fulfill this obligation, the consumer will not be bound by the arbitration agreement unless they choose to proceed with arbitration, or if, after being summoned before an arbitration tribunal, they do not challenge the validity of the agreement through a motion for reconsideration against the first order issued in the process, provided they have been properly notified.

Paragraph 2. If the arbitration agreement is included in a contract executed under general or standard terms with a consumer, as defined by Law [1480](#) of 2011 or refers to it, the consumer must be provided with the information specified in this article.

Paragraph 3. For all contracts with banking institutions or any entity professionally authorized by the Financial Superintendence to lend money to the public, the consumer's acceptance of the arbitration agreement must be stated separately within the credit application and cannot be a requirement or condition for granting or disbursing the loan. Additionally, these entities are prohibited from changing interest rates, commissions, or other financial charges based on whether the consumer agrees to, accepts, or rejects the arbitration agreement.

Any changes to the financial terms of the loan must be based solely on credit risk criteria and cannot, under any circumstances, be connected to the consumer's decision regarding the arbitration agreement.

Section 4. The parties may enter into an arbitration agreement to resolve disputes concerning contractual or extra-contractual liability arising from air, sea, or land transportation relationships, in accordance with the procedure established in this law and in Law [1563](#) of 2012, as applicable, provided the consumer or affected party chooses to proceed by arbitration or through ordinary jurisdiction.

Section 5. If entities overseen by the Financial Superintendence fail to comply with this regulation, they will be subject to sanctions by that authority in line with the provisions of the Organic Statute of the Financial System.

Section 6. Consumers are entitled to receive complete, truthful, transparent, timely, verifiable, understandable, accurate, and suitable information about the scope and effects of the arbitration agreement, their right of withdrawal, and the differences between standard and arbitration procedures—including whether they can seek resolution through civil courts, administrative authorities with judicial functions, or arbitration.

Section 7. To uphold consumer rights, merely agreeing to terms and conditions in consumer relationships does not constitute an arbitration agreement. Such an agreement must be explicit, clear, and reflect the consumer's free and informed will.

Article 6. Withdrawal from Arbitration Agreement. For all contracts with financial service consumers that use standard agreements or general terms and include an arbitration clause, the consumer's right to withdraw from the arbitration agreement is automatically included. This right can be exercised within sixty (60) days of the credit being disbursed for loan contracts, or from the moment the consumer's obligations begin to take effect.

To do so, the consumer must provide written notice to the contracting party stating their intention to exercise the right of withdrawal. In arbitration agreements, this right must be explicitly included; otherwise, it will be considered included by default without a time limit, in which case it can only be exercised up until the deadline for raising substantive defenses in the relevant arbitration proceedings.

Paragraph. For consumer matters, the right of withdrawal described in this article must be exercised within the time frame set out in Article 47 of Law 1480 of 2011 regarding the guarantee of goods and services.

Article 7. Effects of the arbitration agreement in enforcement proceedings.

Anyone bound by the arbitration agreement is deemed to have implicitly agreed to the following:

The arbitrators who oversee enforcement proceedings will be appointed by the arbitration center where the case is handled, if the parties do not agree on the appointments themselves. The same center will also appoint any arbitrator responsible for issuing preliminary precautionary measures. Co-debtors, joint debtors, guarantors, sureties, and any other third-party guarantors or issuers of credit letters securing the obligation, by entering into the contractual relationship, indicate their consent to be bound by the arbitration agreement and will be subject to its provisions in the enforcement arbitration process—unless a subsequent agreement is made after the main legal transaction, in which case they will only be bound if they sign on, thereby expressing their willingness to adhere to the arbitration agreement.

Article 8. Executive Arbitrators. An executive arbitration proceeding will be handled and decided by a single arbitrator, regardless of the amount involved. However, for cases involving larger sums, the parties may agree together on the number of arbitrators, which must always be an odd number. Arbitrators overseeing cases of minimal or lesser value must meet, at a minimum, the same requirements as a Municipal Judge, in addition to any extra qualifications set out by the rules of the arbitration centers.

For cases with greater value, executive arbitrators must, at a minimum, meet the same requirements as a Circuit Judge, along with any additional qualifications required by the rules of the arbitration centers.

Arbitration centers must maintain lists of executive arbitrators. Until these lists are established, existing lists of arbitrators at the respective arbitration center may be used.

Article 9. Arbitrators for Preliminary Precautionary Measures. The arbitrator assigned to precautionary measures is responsible for issuing, carrying out, and overseeing preliminary measures within the proceedings of the executive arbitration process, without limiting the authority of the executing arbitrator on these matters.

The arbitrator for preliminary precautionary measures will always be a single arbitrator who, at minimum, meets the same requirements as an executing arbitrator, in addition to any further qualifications set out by the rules of the arbitration centers. This arbitrator is also subject to the same disclosure obligations, and to the same grounds for disqualification and recusal under the law as those for executing arbitrators.

Arbitration centers must have lists of arbitrators for preliminary precautionary measures. While these lists are being formed, they may use the existing arbitrator lists from their center, provided those arbitrators meet the requirements outlined in the first paragraph of this article.

Article 10. Center regulations and executive arbitration procedure. Arbitration centers may include in their regulations the procedural rules for executive arbitration and the implementation of preliminary precautionary measures, ensuring at least the minimum guarantees of due process.

Additionally, centers may set the fees for arbitrators and administrative expenses, which must cover secretarial work.

When establishing the executive arbitration procedure, arbitration centers must guarantee, at a minimum, due process, the right to defense, and equality between the parties.

Article 11. Amounts in executive arbitration proceedings.

Executive arbitration proceedings are classified as minimum, minor, or major in value, according to the terms set out in Article 2 of Law [1563](#) of 2012.

The case will be considered of minimal value if the monetary claims do not go beyond forty current legal monthly minimum wages (40 SMLMV).

Article 12. Appointment of enforcing arbitrators and arbitrators for preliminary precautionary measures in executive arbitration proceedings. The parties may jointly appoint the enforcing arbitrator within five (5) business days, with the option to extend by mutual agreement, or they may delegate this responsibility to the arbitration center handling the executive arbitration process.

Arbitrators for preliminary precautionary measures will always be selected by the center through a drawing held at the arbitration center managing the executive arbitration proceeding.

The arbitration center will be responsible for the secretariat of the executive arbitration process, following its own regulations. Compensation for secretariat services will be included as part of the expenses paid to the center for operating the tribunal.

Article 13. Duration and Suspension of the Executive Arbitration Process. If the arbitration agreement does not specify the process duration, it will last up to twelve (12) months, starting from the issuance of the order setting the dispute, the order for evidence, and the approval of the credit settlement, as outlined by this law.

Within this period, the executing arbitrator will have four (4) months from the issuance of the order setting the dispute, the order for evidence, and the approval of the credit settlement addressed in this law, to issue the order to proceed with execution or render the arbitral award, as applicable. During this timeframe, any decision resolving requests for clarification, correction, or addition to the award must be issued and notified.

The four (4) month period may be extended one or more times, provided that the total extensions do not exceed twelve (12) months in all.

Paragraph 1. All proceedings prior to the installation hearing of the arbitral tribunal shall have a maximum duration of four (4) months from the filing of the claim. If this period passes without the hearing taking place, the executive arbitration agreement will no longer be in effect for the obligation to be executed, and the arbitration center will refer the proceedings to the appropriate ordinary or administrative court, as the case may be, including any related to precautionary measures, if applicable, so the process can continue.

Paragraph 2. Once the order to proceed with execution has been issued and the time period provided in the first paragraph of this article has expired without the obligation being paid, the file will be forwarded to the competent judge to continue the proceedings.

Paragraph 3. If the process duration ends without an arbitral award being issued, and if necessary, its clarification, supplementation, or correction, the file will be forwarded to the competent judge to continue with the process. All actions carried out before the arbitral tribunal will remain valid.

Article 14. Use of New Technologies and Electronic Means. Actions within the executive arbitration process may be carried out through information and communication technologies, in accordance with the provisions of Law [2213](#) of 2022, to streamline and improve access to justice.

Arbitration centers may set up online platforms to conduct the executive arbitration process virtually.

The use of technological and digital tools will be gradually implemented. It must always uphold the right to equality, so in-person services at Arbitration Centers cannot be excluded when requested by the user, and special accommodations must be provided for vulnerable populations or in areas where connectivity is limited due to geographic conditions.

TITLE II

PROCEDURE FOR THE EXECUTIVE ARBITRATION PROCESS

Article 15. Initiating the Executive Arbitration Process. The executive arbitration process begins with the filing of the claim, which must meet all requirements set by the General Code of Procedure, and be accompanied by the executive arbitration agreement and a statement of the debt, specifying both the principal and any interest accrued up to the date the claim is filed. The statement of the debt must not include any fees or costs related to the arbitral tribunal. If a request for preliminary precautionary measures is made, the statement of the debt will be forwarded by the Center to the arbitrator responsible for such measures.

For cases where a national-level public entity is named as the respondent, the relevant arbitration center must send a notice to the National Agency for Legal Defense of the State, informing them of the claim's submission. Sending this notice, as described in this paragraph, is a mandatory step for the arbitration process to continue.

Article 16. Payment of Fees and Costs in Executive Arbitration Proceedings. Once the claim is received, the arbitration center will estimate the tribunal's fees and costs, and notify the claimant, who will then have ten (10) business days to make full payment.

The arbitration center's costs and arbitrators' fees must initially be paid in full by the party seeking enforcement. However, if the respondent loses the case, the arbitral tribunal may order the respondent to reimburse all or part of these costs to the enforcing party, especially in cases where the claimant has limited financial means, as determined by the arbitration award.

Paragraph. If the fees and expenses for the tribunal outlined in this article are not paid, the center will issue a certificate stating that the executive arbitral tribunal has not been formed due to non-payment. This certificate will have the same legal effect as an order declaring the tribunal's duties concluded and the arbitration agreement void for enforcing the obligations in the executive titles at issue, unless the respondent pays the fees and expenses within 10 days after the claimant's payment deadline, following notification from the arbitration center. In all cases, the arbitration agreement will not be considered void unless the respondent has been given the opportunity to make this payment.

Article 17. Settlement. Both parties may jointly request a settlement hearing at any stage of the executive arbitration process. If an agreement is reached that ends the process before the order to proceed with execution is issued, 30% of the arbitrators' fees and 30% of the arbitration center's costs will be charged, and the remaining balance must be reimbursed to the party who paid. If the process ends by settlement after the order to proceed with execution has been issued, there will be no refund of fees or arbitration center costs already paid.

Article 18. Formation of the arbitral tribunal for the executive arbitration process. Once the claim is received and the required fees and expenses have been paid, the arbitration center will proceed to form the arbitral tribunal. This will be carried out according to the provisions of this law, and, where not regulated, in accordance with Article [14](#) of the Arbitration Statute.

Article 19. Opening hearing for the tribunal and determination of competence and payment order. Once the tribunal's fees and expenses have been paid and the arbitrators have accepted their appointments, and, if applicable, any challenges and replacements have been resolved,

The tribunal will be convened in a hearing, with all parties notified in advance of the time and date set by the center. The hearing will proceed whether or not the parties or their representatives are present.

If a provisional measures arbitrator has been appointed, they will attend the hearing to present their report and submit the record of provisional measures to the tribunal.

The report submitted by the provisional measures arbitrator will be reviewed by the executive arbitration tribunal. If it determines the arbitrator performed their duties appropriately, the tribunal will authorize full payment (100%) of the arbitrator's fees for provisional measures, along with the administrative costs owed to the center.

The executive arbitration tribunal will rule on its own authority to hear and decide the enforcement proceeding, issuing an order that can be challenged by a motion for reconsideration.

If it is decided that the tribunal lacks jurisdiction over any of the claims made in the enforcement action, the arbitration agreement's effect is ended for this particular case, and the file will be forwarded to the competent court to continue the proceedings.

If the tribunal finds it lacks jurisdiction or rejects the claim, it will lift any provisional measures previously ordered, if applicable, and instruct the arbitration center to refund the service fees paid, after first recognizing and paying any fees and costs that may have arisen from the orders given and their execution.

The acceptance, non-acceptance, or rejection of the claim, as well as the payment order, will be handled in accordance with the General Code of Procedure.

Article 20. Service and response to the enforcement claim. The enforcement claim and the payment order will be served for a period of ten (10) days so that any substantive defenses may be raised.

Any substantive defenses raised by the debtor will be forwarded to the creditor, who will have ten (10) days to respond and to provide or request any evidence they wish to use.

Grounds for preliminary objections or failure to meet the formal requirements of the enforceable instrument may only be challenged through a motion for reconsideration against the payment order, as set out in paragraph 2 of Article [430](#) of the General Code of Procedure.

During this period, the debtor must also present any statements or objections related to the calculation of the debt.

No types of incidents are allowed in the executive arbitration proceedings.

Unless otherwise provided by law, the executive arbitral tribunal will resolve all issues that arise during the proceedings, ordering the appropriate evidence needed to make its decision, through an order that can be appealed.

Paragraph. If no defenses are raised within the response period to the claim, the process will continue as established in paragraph 2 of Article

[440](#), of the General Code of Procedure.

Article 21. Amending the Claim in Executive Arbitration Proceedings. The executive arbitration claim may be amended one time only, up until the deadline for submitting substantive exceptions to the enforcing party, as set out in this law.

The amended claim must be submitted in a single, complete document, clearly stating for both the tribunal and the respondent what changes have been made.

Article 22. Order establishing the dispute, ruling on evidence, approval of credit settlement, and start of the timeline for the executive arbitration process. Once the deadline for responding to objections has passed, the tribunal will, within the next ten (10) days, issue a written order that includes the following decisions:

It will define the dispute. It will ensure there are no grounds for nullity and, if necessary, correct the process. It will approve the credit settlement, allowing for future updates. It will rule on evidence,

If no evidence needs to be presented, the executive arbitral tribunal will, in the same order, declare the evidentiary stage closed and grant both parties five (5) days from the order's finalization to submit their written closing arguments.

Once the order referred to in this article is final, the time frame for the executive arbitration process, as set out in this law, will begin to run.

The decisions in this order may only be challenged by a motion for reconsideration.

Article 23. Hearing for Evidence, Closing Arguments, and Final Arbitration Award.

When evidence needs to be presented, all necessary hearings will be held, with both parties taking part.

This stage of the proceedings may follow the guidelines set forth for instruction and judgment hearings in Article [373](#) of the General Code of Procedure. However, the tribunal may set a deadline for the parties to submit written closing arguments, and afterward, the final arbitration award will be electronically notified.

If the exceptions or objections are not upheld, are only partially upheld, or are not filed at all, an order will be issued to continue the execution as appropriate, and fifty percent (50%) of the tribunal's fees and one hundred percent (100%) of the administrative expenses of the arbitration center will be deemed due.

Once the order to proceed with enforcement becomes final, no further debates regarding the fulfillment of the formal requirements of the enforceable title will be allowed.

An award that fully upholds the defendant's exceptions brings the process to a close; in such cases, the release of any targeted assets will be ordered and all fees and costs will be deemed payable to the tribunal and the arbitration center.

The award issued in the arbitral enforcement proceeding may be clarified, supplemented, or corrected either by the tribunal itself or at the request of any party, as long as such action is taken within five (5) days of its notification.

Paragraph 1. The tribunal may request an updated calculation of the credit at any time. The tribunal will then determine whether it is appropriate and lawful.

Paragraph 2. The stages of the arbitral enforcement process relating to the seizure, appraisal, and auction of assets shall be conducted as set forth in the General Code of Procedure. Any substantive decision must be resolved by the enforcement arbitrator.

Article 24. Termination of Tribunal Duties. The tribunal's duties will end in accordance with items 1 and 2 of article [35](#) of the Arbitration Statute, as well as for the following reasons:

Upon expiration of the deadlines set for the proceeding or any extensions granted.

If the termination of tribunal duties is due to the provisions in paragraph 1 of article 12 of this law, the Arbitration Center will reimburse the enforcing creditor or whoever covered the expenses and fees for the arbitral enforcement process.

In cases where the tribunal's functions end for the reason set out in paragraph 2 of Article 12 of this law, and after the proceedings are transferred to the judge, the arbitral tribunal shall declare that the remaining fifty percent (50%) of its fees are due.

If the tribunal's functions end as specified in paragraph 3 of Article 12 of this law, before sending the case to the judge, the arbitral tribunal shall only declare twenty percent (20%) of its fees and the arbitration center's administrative expenses as due.

Upon receiving notice of acceptance in proceedings such as insolvency, validation of private agreements, reorganization, or liquidation of individuals or legal entities, the tribunal will cease its functions with respect to those admitted to these proceedings, but will continue to act regarding third-party guarantors and co-debtors, following the rules of the General Code of Procedure. Similarly, the tribunal will maintain its authority for all matters related to transferring the case file to the appropriate entity or authority. Revocation of the enforcement order if the executive title requirements are not met. Rejection of the claim for the reasons established in this law. When an award is issued that fully upholds the defendant's exceptions. Early fulfillment of the obligation. When enforcement ends due to payment or any other means of abnormal termination. In such cases, the tribunal will keep its exclusive authority to order and carry out all actions resulting from the termination of the process. This is all in accordance with Articles [312](#) and subsequent articles of the General Code of Procedure.

Any tribunal fees and expenses that have not been incurred will be refunded by the tribunal to the enforcing creditor or to the party that covered the costs, in the proportions set forth by this law.

Article 25. Involvement of Additional Parties, Third Parties, and Consolidation of Claims and Executive Arbitration Proceedings.

The consolidation of claims or executive proceedings will in no way cause the arbitral tribunal to lose its jurisdiction. Anyone requesting the consolidation of an executive proceeding or claim, by doing so, agrees to the executive arbitration agreement, accepts the tribunal's authority, and must cover the administrative costs of the arbitration center as well as any fees owed to the arbitrators resulting from such consolidation.

If those requesting the consolidation fail to pay the administration fees and tribunal's honoraria on time, the executive arbitration will move forward without considering the proceedings for which consolidation was asked.

Matters involving incidents of unfreezing assets or any ancillary actions by third parties during the executive arbitration process will be decided by the tribunal, unless the third party objects. In that case, it will be referred to the judge who handled the execution, provided there is no arbitration agreement. The judge must rule within ten (10) days.

At the request of a party, the tribunal may consolidate two or more arbitration proceedings, as long as the first auction date has not yet been set.

Arbitration proceedings will be consolidated into the one with the earliest executive order date. If the orders are issued on the same day, consolidation will occur in the process where notification was first given, or where precautionary measures were taken if notification hasn't happened yet. The parties may also mutually agree on which arbitral tribunal will handle the consolidation.

TITLE III.

APPEALS AND ENFORCEMENT OF THE AWARD

Article 26. Extraordinary Appeal for Annulment Against the Executive Arbitral Award. An extraordinary appeal for annulment may be filed against the executive arbitral award. This appeal must be submitted and substantiated before the arbitral tribunal, specifying the grounds for the request, within ten (10) days following notification of the award or any order resolving its clarification, correction, or addition.

The secretary of the arbitral tribunal will notify the other party of the appeal for ten (10) days, without the need for a formal order. Once that period expires, within the following five (5) days, the Secretary will forward all submitted documents along with a copy of the case file to the competent judicial authority responsible for reviewing the appeal.

Filing an annulment appeal will not pause the proceedings of the executive arbitration process, which will continue as usual.

An annulment appeal is not permitted against the order that authorizes continuation with the execution.

The grounds for annulment, the procedure, and the effects of the annulment judge's ruling shall be governed by Articles [41](#), [42](#), [43](#) and [44](#) of Law [1563](#) of 2012.

Jurisdiction over extraordinary appeals for annulment of executive arbitral awards shall rest with the judicial authorities of the location where the arbitral tribunal was seated, as follows:

The Civil Chamber of the Superior District Court will handle cases involving larger amounts. The Circuit Civil Judge will preside over cases of minimal or lesser value. The Third Section or Chamber of the Administrative Court of the Judicial District will be responsible for appeals seeking to annul executive arbitral awards when a public entity or someone performing administrative duties is involved.

Article 27. Extraordinary Appeal for Review against an Executive Arbitral Award. The review appeal will be governed by the provisions of article [45](#) of the Arbitration Statute.

The Civil Chamber of the Superior Judicial District Court where the arbitration tribunal operated will have jurisdiction to hear the extraordinary review of executive arbitral awards.

When it comes to appeals for annulment or review of executive arbitral awards involving a public entity or someone performing administrative duties, jurisdiction falls to the Third Section or Chamber of the Administrative Litigation Court of the Judicial District where the arbitration tribunal operated.

Article 28. Enforcement of national arbitral awards. National arbitral awards, except those issued in international arbitrations seated in Colombia, may be enforced before the same arbitration tribunal, provided that the request for enforcement is made within ten (10) business days after notice of the award or the decision resolving any clarification, correction, or addition.

If the tribunal was made up of three arbitrators, the presiding arbitrator will serve as the enforcement arbitrator, or if they decline, one of the remaining arbitrators, selected alphabetically by last name. If there was a sole arbitrator, that person will act as the enforcement arbitrator upon accepting the assignment. If no one accepts, the arbitration center will form a new tribunal from the list of enforcement arbitrators.

Once the ten (10) business days have passed, enforcement of the award before the original tribunal is no longer possible, so the party seeking enforcement must convene a new executive arbitration tribunal to collect the obligation.

If the request for enforcement is made within the required timeframe, the enforcement proceedings will begin, following the special regulations of this law.

Any matters not expressly regulated by this law, as long as they are consistent with arbitration procedure, will be governed by Article [306](#) of the General Code of Procedure.

Enforcement of arbitral awards against public entities or private parties performing administrative functions cannot be carried out before the same arbitrators who issued the decision.

Paragraph. If the judge handling the annulment appeal grants a stay of the award's enforcement, any ongoing enforcement proceedings will be suspended.

The provisions of this article also apply to fulfilling obligations recognized through settlement or transaction agreements approved by the arbitral tribunal. The time period stated in the first paragraph of this article will begin from the date the court order becomes final.

if they have been approved.

Article 29. Fees and loss of compensation for arbitrators.

The Ministry of Justice and Law will set the fee structure for arbitrators carrying out enforcement, those overseeing provisional measures, arbitrators executing final awards, and any administrative costs owed to the arbitration center. In doing so, it must use criteria that ensure all citizens can access these services, with special attention to the most vulnerable individuals in socioeconomic groups 1, 2, and 3. Arbitration centers may also establish these fees in their own rules, as long as they stay within those limits.

Enforcing arbitrators will forfeit their fees under the terms outlined in [Article 48](#) of the Arbitration Statute.

Canceling the enforcement award will not impact the fees of the arbitrator responsible for provisional measures. However, if the arbitration panel determines that this arbitrator did not fully perform their duties, the panel may order that all or part of their fees be forfeited and returned to the party who paid them.

TITLE IV.

THE EXECUTIVE ARBITRATION AGREEMENT AND THE MORTGAGE GUARANTEE

Article 30. Executive arbitration proceedings for mortgage credit. Within a mortgage loan contract, its modifications, or subsequent agreements, the parties may agree to include an arbitration clause as provided under this law.

Mortgage loans for housing will require a special arbitration agreement that ensures information is provided as set out in this law. Mortgage loans for the purchase of social interest housing, as defined in Article [91](#) of Law [388](#) of 1997 and any regulations that replace it, as well as mortgage loans for homes where minors live, cannot be subject to an executive arbitration agreement, even with informed consent.

Foreclosure proceedings will be carried out under the terms established by this law, and for anything not covered herein, in accordance with Articles [467](#) and following of the General Code of Procedure.

Paragraph 1. For any public deed granting a mortgage on property intended for housing that includes an executive arbitration agreement, the notary must ask the property owner if they have been informed about it, and in every case, must provide full information and warn of the scope and impact of the agreement and the arbitration process. The notary will expressly document the inclusion of the arbitration agreement in the contract and the resulting implications. If the notary fails to record this in the public deed as required by this article, it constitutes misconduct.

Paragraph 2. In executive arbitration proceedings for housing loans, all arbitrator fees or arbitration center expenses will be fully covered by the creditor seeking enforcement; these costs cannot be charged to the debtor or required as part of their obligations.

If the creditor fails to comply with this regulation, they may be subject to investigation and penalties according to this law.

Paragraph 3. If there is a mortgage lender who signed a mortgage contract before this law came into effect, they may submit a written request to the mortgage debtor to agree, within ten (10) days, to the executive arbitration clause as outlined in this law. If the debtor does not respond, it will be understood as a refusal to enter into the agreement.

CHAPTER V.

ORDER AND EXECUTION OF PRECAUTIONARY MEASURES.

Article 31. Precautionary Measures. The issuance, enforcement, and lifting of precautionary measures shall be governed by the provisions of the General Code of Procedure or the Code of Administrative and Contentious Administrative Procedure, as applicable.

At the request of either party, the tribunal may order precautionary measures such as attachment or sequestration, in accordance with the terms outlined in Articles [599](#) and following of the General Code of Procedure.

If the tribunal ceases its functions, it will order the lifting of any previously ordered or implemented precautionary measures. If thirty (30) days pass without the lifting of such measures, they will automatically expire. The registrar, or whoever is responsible, will proceed to cancel them upon request.

If the tribunal ceases its functions under the circumstances described in item 2 of Article 23, any precautionary measures previously ordered against individuals involved in the specified proceedings will remain in effect. The entire enforcement process will then be handed over to the appropriate authority.

Article 32. Preliminary Injunctive Measures. Before the tribunal is formally established, either party may request the authorized arbitration center to appoint an arbitrator to order and enforce precautionary measures, following the procedures outlined in this law.

The arbitrator assigned to preliminary precautionary measures has the authority to end proceedings if the obligation has been fully paid or if the process concludes by other extraordinary means as set out in the General Code of Procedure, provided the executive arbitral tribunal has not yet been constituted. In these cases, the arbitrator may declare entitlement to 100% of their fees and the administrative costs of the Center.

Article 33. Requirements for Requests to Apply Preliminary Precautionary Measures. To request the issuance and implementation of preliminary precautionary measures, the following requirements must be met:

Submit your request to the appropriate center, including the enforceable title. Provide an updated statement of the debt subject to arbitral enforcement. Prove the existence of the invoked arbitration agreement. Fulfill the formal requirements outlined in items 2, 3, and 10 of Article [82](#), as well as items 1 and 2 of Article [84](#) of the General Code of Procedure. Comply with any other legal requirements for the issuance and enforcement of precautionary measures, in accordance with the General Code of Procedure or the Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation, as applicable.

Article 34. Procedure for Preliminary Injunctions of Attachment and Seizure Within Executive Arbitration Proceedings.

Once the request for preliminary injunctions is received, the arbitration center will determine the applicable fees and expenses. After these fees and expenses are set and the party has been notified, they will have five (5) days to make the required payment.

Once the fees and expenses are paid, the center will appoint an arbitrator to handle the precautionary measures.

If the applicant does not deposit the required fees and expenses for approving and carrying out the precautionary measures, the request will be considered withdrawn. The applicant may then only submit the request to the executing arbitrator.

After payment of fees and expenses, and upon acceptance of the appointment by the arbitrator for precautionary measures, the request will be either admitted, not admitted, or denied.

In the order admitting or not admitting the request for the precautionary measure, the arbitrator will approve the fees and expenses set by the arbitration center. This order may be challenged through a motion for reconsideration.

If the request for precautionary measures is not admitted, the petitioner will have five (5) days to correct any formal deficiencies in their application.

Once the deficiencies are corrected, the request will be admitted; otherwise, the application will be rejected.

Once the request is approved, the arbitrator will issue and carry out the ordered precautionary measures.

The implementation of these precautionary measures must be completed within thirty (30) business days, starting from the date the order enforcing them becomes final.

Within twenty (20) days after the precautionary measure has been carried out, the party seeking enforcement must file the arbitral execution claim with the arbitration center. If the claim is not filed within this period, or if the prior steps before the arbitral tribunal's installation hearing are not completed as required by this law, the precautionary measure will be lifted immediately without need for a separate order.

The arbitrator responsible for precautionary measures must attend the arbitral tribunal's installation hearing, as required by this law, to fulfill the purposes set forth therein. From the moment the execution tribunal is installed, the precautionary arbitrator's authority ends.

At any stage, whether before the preliminary arbitrator or the enforcement arbitrator, the affected party may exercise the rights granted in Articles [602](#) to [604](#) of the General Code of Procedure.

Any matters not addressed in this article will follow what is established in Articles [599](#) to [604](#) of the General Code of Procedure.

Article 35. About the management, appraisal, and auction of assets.

Assets that are legally seized or confiscated must be managed, guarded, and handled by specialized individuals or organizations, ensuring their preservation and proper oversight.

Arbitration centers may enter into agreements with specialized organizations to handle all necessary procedures for the management, appraisal, and eventual auction of assets subject to enforcement proceedings. These auctions can be carried out directly by the arbitration center, as outlined in Article 448 of the General Code of Procedure, or by using new technologies, such as electronic auction platforms regulated by Law 1676 of 2013 and according to the powers granted in paragraph 1, Article 454 of the General Code of Procedure.

Paragraph 1. Legal entities are permitted to establish specialized organizations to provide services related to the management, appraisal, and auction of assets subject to precautionary measures, provided they meet the requirements set by the Ministry of Justice and Law, which will also be responsible for authorizing their operations. The Ministry of Justice and Law will regulate the fees, expenses, or costs that authorized entities may charge for managing seized and secured assets, as well as the way arbitration centers must keep records of funds received in compliance with precautionary measures, and the assets that are seized and secured.

Arbitration centers may choose to directly manage, appraise, and auction assets subject to precautionary measures. If they do so, they must apply the rates set by the Ministry of Justice and Law for the specialized entities described here.

The Ministry of Justice and Law will oversee, inspect, and supervise specialized entities involved in the management, appraisal, and auction of assets subject to precautionary measures.

Paragraph 2. Arbitration centers will manage the funds received from arbitration enforcement proceedings, as well as those paid to comply with precautionary measures, through an entity supervised by the Financial Superintendence, using judicial deposit accounts, trust arrangements, or autonomous patrimonies, as chosen. Funds arising from precautionary measures will be deposited in the name of the debtor and under the order of the arbitral tribunal, ensuring that resources can be clearly identified and allocated by debtor, creditor, and the relevant proceeding. Arbitration centers must exercise reasonable care in safeguarding and preserving any non-monetary assets subject to precautionary measures that are in their possession.

Assets that have been seized and secured during the arbitration process will continue to be managed in accordance with this law, even if the proceedings are transferred to an ordinary or enforcement judge.

CHAPTER VI

SOCIAL ENFORCEMENT ARBITRATION

Section 36. Social enforcement arbitration. Arbitration centers must actively promote social enforcement arbitration and ensure free access to this service for low-value claims, as outlined in Section 25 of the General Code of Procedure. Each center may also offer the service for larger claims if they choose to.

For these proceedings, the parties are not required to have professional legal representation, and the process will be handled by a single arbitrator, even if the arbitration agreement specifies a different number. Arbitration centers may enter agreements with highly accredited universities, allowing students from legal clinics and those completing judicial clerkships to represent

The parties involved in social enforcement arbitration processes, up to the amount specified in the first paragraph of this article.

Each arbitration center will keep a roster of volunteer arbitrators, who will be selected for each case by random draw. If the arbitrators on the list are unable to proceed with the arbitration, the center will randomly select arbitrators from its general list of enforcement arbitrators.

An arbitrator chosen by random draw who refuses the appointment without valid reason will be removed from the center's list of arbitrators.

TITLE VII

GENERAL PROHIBITIONS.

Article 37. Prohibition on banks and financial institutions from creating or participating in any capacity in entities that oversee executive arbitration proceedings. Institutions supervised by the Financial Superintendency, associations and electronic payment networks, and legal or natural persons whose main activity is lending money, are not allowed to take part, in any manner, in the creation, development, or operation of legal entities—whether for profit or not—that establish arbitration centers managing executive arbitration processes.

Similarly, associations and electronic payment networks are strictly prohibited from participating in any form in the creation, development, or implementation of these types of institutions.

Legal or natural persons whose primary business is lending money are not permitted to participate in any way in the creation, development, or operation of arbitration centers that handle executive arbitration cases.

If institutions supervised by the Financial Superintendency violate this rule, they will be sanctioned by the Superintendency in accordance with the rules set out in the Organic Statute of the Financial System.

If other legal entities fail to comply with this regulation, the entity responsible for their inspection, oversight, or control will impose the appropriate sanctions.

If an individual does not comply with this regulation, the Ministry of Justice and Law will impose the appropriate sanctions.

Article 38. Confidentiality of proceedings. The procedures governed by this law, as they involve enforcement actions with precautionary measures, must remain confidential. Any improper disclosure of information from authorized entities carrying out these proceedings will result in administrative sanctions for the centers, their operators, and the parties involved.

TITLE VIII

FINAL PROVISIONS.

Article 39. Gaps in the law. Any regulatory gaps will be interpreted and resolved based on Law [1563](#) of 2012, Law 1564 of 2012, and the principles of pro actione, procedural economy, and access to justice.

Article 40. Effectiveness. This law will take effect six (6) months after its publication and will repeal any provisions that conflict with it.

The President of the Honorable Senate of the Republic,

Efraín Cepeda Sarabia.

The General Secretary of the Honorable Senate of the Republic

Diego Alejandro González González

The President of the Honorable House of Representatives

Jaime Raúl Salamanca Torres

The General Secretary of the Honorable House of Representatives

Jaime Luis Lacouture Peñalosa

PRESIDENCY OF THE CONGRESS OF THE REPUBLIC

Bogotá, D.C., August 26, 2025

In accordance with Articles [166](#) and [168](#) of the Political Constitution of Colombia, as set forth in Articles [199](#) and [201](#) of Law [5](#) of 1992 (Congress Regulations), which state:

Article [166](#) “The Government shall have six days to return with objections any bill containing no more than twenty articles; ten days for those with twenty-one to fifty articles; and up to twenty days for bills with more than fifty articles.

If these periods pass without the Government returning the bill with objections, the President must approve and enact it. If Congress goes into recess during these periods, the President must publish the approved or objected bill within the same deadlines.”

(...)

“Article 168. If the President fails to fulfill the duty of enacting laws within the terms and conditions set by the Constitution, such laws shall be enacted and published by the President of Congress.”

In light of the above, and since the Office of the President has returned Bill No. 08 of 2023 (Senate), 211 of 2024 (House), which introduces arbitration for executive proceedings aimed at easing the judicial system's workload, without the proper executive sanction, the President of Congress now grants the required approval.

REPUBLIC OF COLOMBIA – LEGISLATIVE BRANCH OF PUBLIC POWER
CONGRESS OF THE REPUBLIC.

PUBLISH AND ENFORCE.

Issued in Bogotá, D.C., on August 27, 2025.

PRESIDENT OF THE CONGRESS OF THE REPUBLIC
LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY

GENERAL SECRETARIAT

SLE-CS-990-2025

Bogotá, D.C., August 26, 2025

Dr.

GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO

President of the Republic

City

Mr. President:

In accordance with Articles [166](#)[1] and [168](#)[2] of the Political Constitution, and along with all relevant documentation, I respectfully—and with the proper authorization from Dr. Lidio Arturo García Turbay, President of the Senate—submit, in duplicate, the file duly signed by the President of Congress, which establishes arbitration for executive proceedings to help alleviate congestion in the judicial system.

The referenced bill was reviewed and passed in the First Commission session of the Senate of the Republic on September 5, 2023, and in the Senate Plenary session on July 24, 2024. In the House of Representatives, it was approved in the Third Commission session on December 11, 2024, and in the Plenary sessions on June 11 and 16, 2025.

The reconciliation report was approved by the Senate of the Republic and the House of Representatives on June 19, 2025, respectively.

Sincerely,

The Secretary General,

Diego Alejandro González González.

FOOTNOTES

[1] Article 166. “The Government has six days to return any bill with objections if it contains no more than twenty articles; ten days if the bill has twenty-one to fifty articles; and up to twenty days if it exceeds fifty articles.

If the Government does not return the bill with objections within the timeframes mentioned, the President must enact and publish it. If Congress goes into recess during these periods, the President is required to publish the sanctioned or objected bill within those same deadlines.”

(...)

[2] Article 168. If the President fails to fulfill the duty of enacting laws within the timeframes and under the conditions set by the Constitution, the President of Congress will enact and publish them.”

Date and time created: 2026-04-09 04:08:56